

La reconfiguración de la ayuda al desarrollo en América Latina ante la administración Trump 2.0: entre la dependencia estructural y la búsqueda de autonomía

The reconfiguration of development aid to Latin America under the Trump 2.0 Administration: between structural dependence and the quest for autonomy

DOI: <https://doi.org/10.51378/eca.v80i783.10080>

José Alberto Umaña Salguero

Catedrático

Universidad de El Salvador

El Salvador

alberto.umana@ues.edu.sv

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6906-9378>

Fecha de recepción: 11 de agosto de 2025

Fecha de aceptación: 23 de septiembre de 2025



Resumen

Este artículo analiza la reconfiguración de la arquitectura de la ayuda al desarrollo en América Latina durante la segunda administración de Donald Trump, desde un enfoque estructuralista y neorrealista. A partir de fuentes primarias y secundarias, se examina hasta qué punto el repliegue de la cooperación estadounidense — materializado en la contracción de USAID, la subordinación de la ayuda a intereses estratégicos como la seguridad y la contención migratoria, y el debilitamiento del multilateralismo — ha transformado el sistema internacional de cooperación o, por el contrario, representa una fase de continuidad dentro de sus lógicas estructurales de poder. El estudio también explora la expansión de China como actor alternativo, cuya estrategia de influencia combina instrumentos financieros, institucionales y culturales articulados en torno a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y a la narrativa de la cooperación Sur-Sur. Asimismo, se analizan las respuestas de los países latinoamericanos ante este escenario, caracterizadas por una diplomacia defensiva y esfuerzos fragmentados de articulación regional que oscilan entre la búsqueda de autonomía y la reproducción de nuevas dependencias. En conjunto, el artículo ofrece herramientas analíticas para comprender las tensiones entre continuidad y cambio en la arquitectura global del desarrollo, así como los dilemas que enfrenta América Latina ante la disputa hegemónica contemporánea entre Washington y Pekín.

Palabras clave: ayuda oficial al desarrollo, cooperación internacional, cooperación sur-sur, política exterior, relaciones internacionales.

Abstract

This article analyzes the reconfiguration of development aid architecture in Latin America during Donald Trump's second administration from a structuralist and neorealist perspective. Using primary and secondary sources, it examines the extent to which the withdrawal of US cooperation—manifested in the contrac-

tion of USAID, the subordination of aid to strategic interests such as security and migration containment, and the weakening of multilateralism—has transformed the international cooperation system or, on the contrary, represents a phase of continuity within its structural logic of power. The study also explores the expansion of China as an alternative actor, whose strategy of influence combines financial, institutional, and cultural instruments articulated around the Belt and Road Initiative and the narrative of South-South cooperation. It also analyzes the responses of Latin American countries to this scenario, characterized by defensive diplomacy and fragmented efforts at regional coordination that oscillate between the search for autonomy and the reproduction of new dependencies. Overall, the article offers analytical tools for understanding the tensions between continuity and change in the global development architecture, as well as the dilemmas facing Latin America in the contemporary hegemonic dispute between Washington and Beijing.

Keywords: official development assistance, international cooperation, south-south cooperation, foreign policy, international relations.

1. Introducción

“Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan. Todos nos necesitan”

La segunda elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) ha generado una nueva ola de incertidumbre en América Latina, especialmente por su enfoque impredecible en política exterior. Desde los primeros meses de su nueva administración, se ha evidenciado una priorización de la seguridad fronteriza y la renegociación de tratados comerciales, lo que afecta directamente a países como México y las naciones del istmo centroamericano. En particular, su postura restrictiva hacia la migración y los recortes en programas de cooperación internacional han dejado a numerosos gobiernos

y organizaciones de la sociedad civil de la región en la búsqueda de alternativas para sostener la estabilidad macroeconómica y la continuidad de proyectos dependientes de los flujos de ayuda al desarrollo, especialmente en el ámbito humanitario.

La arquitectura de la ayuda al desarrollo, históricamente concebida como un instrumento de proyección geopolítica de los Estados Unidos en el mundo, ha comenzado a tambalear. Decisiones como el congelamiento de las operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la salida del Acuerdo de París y el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) evidencian un repliegue del compromiso multilateral estadounidense. A ello se suma el anuncio de recortes presupuestarios para la ayuda al desarrollo por parte de otras potencias occidentales, lo que ha abierto espacios para que actores emergentes, como la República Popular China, fortalezcan su presencia en la región través de mecanismos financieros, comerciales y culturales no alineados con los parámetros tradicionales de la ayuda occidental (Bullmann y Optenhögel, 2025).

Frente a este panorama, los gobiernos latinoamericanos intentan descifrar el alcance de las nuevas directrices de Washington, caracterizadas más por mecanismos de presión y coerción que por propuestas constructivas en materia de desarrollo. Esta dinámica podría anticipar un cambio en las relaciones hemisféricas, en el que se vislumbra — como posibilidad — una pérdida relativa de la capacidad de atracción del modelo estadounidense, especialmente en términos de cooperación basada en valores compartidos. No obstante, esta aparente disminución de influencia debe analizarse críticamente, ya que Estados Unidos continúa ejerciendo poder mediante mecanismos de coerción y condicionalidad, lo que sugiere una transformación del tipo de influencia más que su desaparición. En este sentido, la dependencia estructural de muchos países latinoamericanos podría seguir repro-

duciendo formas de subordinación, incluso en ausencia de una narrativa atractiva de desarrollo.

Esta transformación obliga a reconsiderar las categorías analíticas con las que se ha comprendido históricamente la cooperación al desarrollo en América Latina. La irrupción de nuevas modalidades de financiamiento — como los préstamos concesionales, las inversiones en infraestructura y las asociaciones público-privadas impulsadas desde el Sur Global — plantea interrogantes sobre la naturaleza misma de la cooperación, sus motivaciones políticas y su capacidad para promover un desarrollo autónomo y sostenible. Asimismo, el surgimiento de actores extrarregionales, junto con el debilitamiento del multilateralismo liberal, invita a examinar si el actual escenario configura una transición hacia un orden más multipolar o, por el contrario, una reconfiguración de viejas jerarquías bajo nuevos discursos.

Así, la investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto la reorientación de la política de cooperación internacional de los Estados Unidos bajo la administración Trump 2.0 ha reconfigurado la arquitectura de la ayuda al desarrollo en América Latina, y qué implicaciones tiene ello para la autonomía regional frente a la creciente influencia de China? A partir de esta interrogante, el artículo tiene como propósito analizar cómo el repliegue de la cooperación estadounidense ha modificado las dinámicas del sistema internacional de ayuda al desarrollo, evaluando si este proceso constituye una ruptura estructural o un episodio de continuidad que ha favorecido la expansión de actores emergentes —especialmente China — y la redefinición de los márgenes de autonomía y dependencia en la región.

A partir de esa dinámica, esta investigación se enmarca en una iniciativa académica que responde a la necesidad de comprender el impacto de la nueva política de cooperación al desarrollo de los Estados Unidos hacia América Latina, particularmente en sectores sensibles como el humanitario y el

profesional. La reconfiguración de la arquitectura internacional del desarrollo plantea desafíos concretos para actores que operan en el terreno, por lo que este estudio busca ofrecer herramientas analíticas que permitan interpretar los cambios recientes en los flujos de ayuda, sus condicionamientos estratégicos y sus efectos sobre la autonomía regional. Esta necesidad de análisis crítico y contextualizado justifica la pertinencia de la presente investigación.

El presente trabajo se sustenta en una investigación de carácter documental y analítico, basada en la revisión sistemática de fuentes académicas, institucionales y periodísticas especializadas en política internacional y cooperación al desarrollo. Se recurrió a literatura científica reciente —artículos indexados, informes de organismos multilaterales y bases de datos especializadas— complementada con fuentes primarias y secundarias provenientes de medios internacionales, comunicados oficiales y documentos de política exterior. Este enfoque cualitativo permitió reconstruir la evolución de la arquitectura de la ayuda al desarrollo en América Latina durante la segunda administración de Donald Trump, así como identificar las tendencias emergentes asociadas a la expansión de China y al reposicionamiento de la cooperación Sur-Sur. La triangulación de fuentes permitió contrastar discursos oficiales, dinámicas financieras y respuestas institucionales, ofreciendo una lectura crítica de los procesos de continuidad y cambio en el sistema internacional de cooperación.

No obstante, el estudio presenta ciertas limitaciones derivadas tanto de la naturaleza del objeto de análisis como del contexto político en el que se desarrolla. En primer lugar, se trata de un fenómeno en curso: la segunda administración de Trump 2.0 aún se encuentra redefiniendo los lineamientos de su política exterior, lo que restringe la disponibilidad de datos consolidados sobre el impacto humanitario y financiero de los recortes en la cooperación. Asimismo, la falta de información completa y actualizada por parte de

agencias oficiales estadounidenses dificulta una evaluación exhaustiva de la magnitud y dirección de los fondos afectados. En segundo término, aunque Estados Unidos continúa siendo el principal donante de la región, no constituye el único actor relevante; por tanto, los efectos de su repliegue deben interpretarse en el marco de un sistema internacional de cooperación plural y competitivo, donde intervienen múltiples fuentes de financiamiento. Finalmente, el carácter documental de la investigación impone una dependencia de la información disponible en fuentes secundarias, lo que obliga a cautela en la interpretación de tendencias y proyecciones. Aun con estas limitaciones, el análisis permite ofrecer un panorama riguroso y contextualizado de un proceso de reconfiguración que, si bien todavía en desarrollo, resulta crucial para comprender las transformaciones contemporáneas del sistema de ayuda al desarrollo en América Latina.

1.1. Marco teórico: estructuralismo y neorrealismo en el análisis de la cooperación internacional

El estudio de la reconfiguración de la ayuda al desarrollo en América Latina se inscribe en el cruce entre dos marcos teóricos centrales de las relaciones internacionales: el estructuralismo y el neorrealismo. Ambos enfoques, aunque con diferentes fundamentos epistemológicos, convergen en interpretar la cooperación internacional no como un instrumento neutral de solidaridad, sino como una expresión de las relaciones de poder en el sistema mundial.

Desde la tradición estructuralista —derivada de la teoría de la dependencia latinoamericana—, la cooperación se concibe como parte de la estructura económica y política global que reproduce la división entre centro y periferia. Prebisch (1950) y Cardoso (1977) explicaron cómo la inserción periférica de América Latina responde a dinámicas históricas de subordinación, en las cuales los flujos financieros, tecnológicos y comerciales fortalecen la hegemonía del centro. En esta

perspectiva, la ayuda al desarrollo constituye un mecanismo funcional a la reproducción de esas asimetrías, legitimando un modelo de gobernanza global que perpetúa la dependencia del Sur global respecto a las potencias occidentales. Autores contemporáneos como Piñón Avilés *et al.* (2024) y Malacalza (2020a) destacan que la cooperación, lejos de neutralizar esas desigualdades, actúa como un dispositivo de poder que define las condiciones de acceso al financiamiento, la agenda temática y la dirección de las políticas públicas.

Por su parte, el neorrealismo — representado por autores como Gilpin y Gilpin (2001) — interpreta la ayuda al desarrollo como un instrumento del Estado hegemónico para preservar la estabilidad del sistema internacional. Desde esta perspectiva, la asistencia se entiende como una forma de “poder estructurante” destinada a sostener el orden global, garantizar la provisión de bienes públicos internacionales y mantener la gobernabilidad internacional bajo los intereses de las grandes potencias. Las fuerzas económicas y los grupos de presión moldean los intereses de los Estados, de modo que la cooperación se convierte en una extensión de la política exterior y de la competencia interestatal. La administración Trump constituye un ejemplo paradigmático de esta visión: la ayuda es subordinada a objetivos estratégicos concretos — control migratorio, contención geopolítica y reciprocidad económica —, confirmando la instrumentalización neorrealista de la cooperación.

Ambas perspectivas convergen en el caso latinoamericano. El estructuralismo permite comprender cómo las asimetrías históricas configuran la posición periférica de la región dentro del sistema internacional; mientras que el neorrealismo explica cómo las potencias — Estados Unidos y, más recientemente, China — utilizan la cooperación como herramienta para preservar o disputar su hegemonía. En consecuencia, la reconfiguración contemporánea de la arquitectura de la ayuda al desarrollo refleja una tensión entre dependencia estructural y competencia hegemónica.

América Latina emerge, así como un espacio de fricción entre proyectos de dominación y aspiraciones de autonomía, donde la cooperación internacional se transforma en un campo de poder y no en un mecanismo desinteresado de desarrollo.

2. La ayuda al desarrollo en América Latina: la visión estadounidense

En 2013, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, declaró ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que “la era de la *Doctrina Monroe* ha terminado”, sugiriendo un aparente compromiso hacia una relación más equitativa con América Latina. Aunque no se trató de una derogación formal, el anuncio fue interpretado como un intento de distanciarse de las políticas intervencionistas que históricamente habían caracterizado la relación hemisférica. En el escenario actual, se plantea la posibilidad de que la postura estadounidense sea una evolución de la doctrina previa, en lugar de una ruptura completa. En esa línea, algunos analistas han señalado la emergencia de una “nueva” doctrina caracterizada por conservadurismo, políticas de mano dura y nacionalismo, elementos que podrían ser interpretados como una estrategia para alcanzar los objetivos del siglo XXI bajo el lema “*Make America great again*” (Bühler, 2025).

Este giro doctrinal se produjo en un contexto internacional marcado por transformaciones profundas: el desencanto con el orden económico liberal, el auge del populismo autoritario, la polarización política, la pandemia de COVID-19, la creciente asertividad de China en el sistema internacional y el uso de la fuerza militar por parte de Rusia. América Latina, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos estructurales: el impacto económico del fin del auge de las materias primas en 2014, el aumento de los flujos migratorios y la debilitada capacidad estatal para garantizar seguridad y bienestar (Mares, 2022).

Durante la primera administración de Donald Trump (2017–2021), la política exterior estadounidense hacia América Latina experimentó un giro significativo. Se adoptó un enfoque marcadamente unilateral, se redujeron los compromisos multilaterales y se intensificó la instrumentalización de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión política. Cabe señalar que esta instrumentalización no constituye una novedad exclusiva de la era Trump, ya que históricamente Estados Unidos ha utilizado la cooperación como herramienta de influencia estratégica, aunque con distintos matices y enfoques según el contexto político. Bajo la administración Trump, sin embargo, esta práctica adquirió un carácter más explícito y coercitivo, subordinando la ayuda a intereses nacionales inmediatos y rompiendo con el discurso tradicional de cooperación basado en principios de solidaridad y desarrollo sostenible (Rodríguez Mateo, 2024).

La diplomacia regional también se debilitó notablemente. La administración Trump retrasó la designación de embajadores en varios países latinoamericanos y en la propia OEA; mientras que el principal diplomático del Departamento de Estado para la región ocupaba solo un cargo interino. La respuesta ante la pandemia de COVID-19 fue tardía y descoordinada, lo que acentuó la percepción de abandono por parte de Washington. Su retórica agresiva sobre temas como el narcotráfico, la migración, la violencia y la supuesta amenaza sanitaria proveniente de la región deterioró aún más las relaciones. Incluso, en contextos de intereses compartidos, la administración optó por imponer condiciones unilaterales, recurriendo a amenazas de sanciones o exclusión bajo la apariencia de acuerdos “ganar-ganar”, que en realidad reflejaban un uso intensivo del poder duro (Taladrid, 2021).

En este escenario, la visión estadounidense sobre la ayuda al desarrollo¹ hacia

1 La “ayuda al desarrollo” en las relaciones internacionales es un término amplio y general que se refiere a todas las formas de apoyo — finan-

América Latina también experimentó una transformación sustancial. La cooperación internacional dejó de concebirse como una herramienta orientada al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible, para convertirse en un instrumento subordinado a los intereses estratégicos inmediatos de Washington. La ayuda fue condicionada a objetivos específicos como el control migratorio, la seguridad fronteriza y el alineamiento político, lo que redujo significativamente su carácter estructural y de largo plazo.

Esta retórica se manifestó en la política hacia América Central, especialmente en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Desde una perspectiva migratoria, la estrategia de la administración Trump consistió en transformar a estos países en “terceros países seguros”; es decir, en territorios receptores de migrantes devueltos desde EE. UU., con el objetivo de contener y disuadir los flujos migratorios hacia el norte. En 2019, se firmaron acuerdos bilaterales con los tres gobiernos centroamericanos en los que se comprometían a reforzar sus controles migratorios y aceptar solicitantes de asilo devueltos, a cambio de promesas ambiguas de cooperación futura. Sin embargo, estos acuerdos fueron precedidos por la amenaza — y posterior ejecución — de recortes a la ayuda económica y a proyectos de desarrollo territorial², lo que evidenció el uso coercitivo de la cooperación como herramienta de presión política. Esta decisión respondió, en gran medida, a la frustración del expresidente Trump ante lo que consideró la incapacidad de los gobiernos del

.....
ciero, técnico, humanitario o institucional — que se brindan a países en vías de desarrollo con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas, sociales y políticas.

2 Según el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU., en 2019 la administración Trump ordenó que el 85 % (396 millones de dólares) de los fondos del año fiscal 2018 destinados al Triángulo Norte fueran reprogramados, afectando programas de desarrollo rural, prevención de violencia y fortalecimiento institucional (Welsh, 2021).

Triángulo Norte para frenar la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos (Malamud y Núñez Castellano, 2020).

Aunque la administración Trump declaró constantemente su intención de reducir significativamente la ayuda al desarrollo a estos países, el Congreso se opuso a los recortes. En el caso de América Latina y el Caribe, la ayuda estadounidense entre 2018 y 2021 osciló entre los 1.670 y 1.800 millones de dólares cada año, cifra equiparable a la de años anteriores, aunque el enfoque de algunas categorías de ayuda al exterior y los países beneficiarios cambiaron. El Congreso también se opuso a la propuesta de Trump de eliminar la Fundación Interamericana para el Desarrollo, aunque la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha intentado reducir a la mitad su financiación en los últimos años, y el Congreso ha mantenido el apoyo a la OEA (Meyer, 2024).

Paralelamente, América Latina se encuentra inmersa en un escenario geopolítico cada vez más complejo, marcado por la competencia inter-hegemónica entre los EE. UU. y China, así como por la búsqueda de una mayor autonomía en un orden internacional multipolar. El declive relativo de la hegemonía estadounidense y la creciente proyección global de China han configurado una dinámica de rivalidad que influye directamente en las oportunidades de desarrollo regional (Pastrana y Gehring, 2017).

En ese sentido, la disputa hegemónica emergente entre los EE. UU. y China se presenta con particular claridad en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Mientras Washington y sus aliados del Grupo de los Siete (G7) promueven iniciativas como *Build Back Better World* (B3W) y el *Global Gateway* de la Unión Europea (UE), orientadas a contrarrestar la influencia china, Pekín ha consolidado su presencia global a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Estas plataformas no solo compiten por recursos y visibilidad, sino que representan modelos

antagónicos de gobernanza internacional: uno basado en la condicionalidad normativa y la defensa del orden liberal, y otro centrado en la no injerencia, la flexibilidad financiera y la cooperación Sur – Sur. En este escenario, los países de América Latina se ven obligados a navegar entre estas esferas de influencia, lo que plantea dilemas estratégicos sobre su inserción internacional y su capacidad para preservar márgenes de autonomía en un orden global crecientemente polarizado (Malacalza y Morasso, 2025).

Esta competencia geopolítica se intensificó durante la pandemia de COVID-19, donde se evidenciaron las asimetrías en la distribución de la ayuda humanitaria. En el primer semestre de 2020, de los 900 millones de dólares desembolsados por los EE. UU. en concepto de ayuda humanitaria a nivel mundial, apenas el 9 % fue destinado a América Latina. Por su parte, la República Popular China canalizó aproximadamente 665 millones de dólares hacia la región (Malacalza, 2020b). Esta diferencia no solo reflejó una reconfiguración de prioridades estratégicas, sino que también evidenció la voluntad de Pekín de ocupar el vacío dejado por Washington.

La administración Trump intensificó sus esfuerzos por limitar la influencia china en el hemisferio occidental, lo que se tradujo en una intervención directa en la gobernanza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por primera vez en su historia, y rompiendo con una práctica consuetudinaria de representación regional, se logró imponer un candidato no latinoamericano a la presidencia del organismo, lo que fue interpretado como un intento explícito de reafirmar el control político de los Estados Unidos sobre las instituciones financieras interamericanas. Cabe destacar que China, aunque no es prestatario, posee derecho a voto tanto en el BID como en el Banco de Desarrollo del Caribe, lo que refuerza su capacidad de influencia institucional en la región.

A ello se suma un clima político regional caracterizado por el auge del populismo, la

polarización y la instrumentalización de las relaciones exteriores con fines domésticos (Mudde y Kaltwasser, 2017). Las alianzas regionales, lejos de responder a una lógica de integración hemisférica, se estructuran en torno a intereses comunes que compiten y se superponen, reflejando lo que Ruggirozzi y Tussie (2018) definen como un regionalismo posthegemónico. En este marco, los gobiernos de centro-izquierda de la región han promovido históricamente una agenda centrada en la soberanía nacional y en la creación de mecanismos regionales que excluyen a los Estados Unidos y Canadá, lo que, en la práctica, ha favorecido los intereses estratégicos de China (Ellis, 2022).

Para Mares (2022), América Latina quiere el diálogo, pero ofrece pocas sanciones efectivas para promover ese diálogo porque no quiere “intervenir”. Los autoritarios latinoamericanos utilizan el respeto a la soberanía como medio para legitimar sus acciones, incluso cuando esas acciones eliminan progresivamente los mismos elementos que América Latina considera necesarios para la democracia y el desarrollo (p. 84).

Esta instrumentalización del principio de soberanía nacional, cuando se emplea para limitar la denuncia de violaciones a los derechos humanos o restringir la cooperación internacional — particularmente aquella proveniente de actores como USAID —, constituye una respuesta errónea en un sistema internacional interdependiente. En un entorno globalizado, donde la diplomacia y el desarrollo sostenible requieren marcos de corresponsabilidad y apertura, subordinar la cooperación al desarrollo a rivalidades ideológicas o a discursos de confrontación geopolítica debilita las capacidades estatales y obstaculiza el progreso democrático y social en el terreno (Malacalza, 2024).

Con el cambio de administración en 2021, la llegada de Joe Biden a la presidencia marcó un intento por reorientar la política de cooperación hacia América Latina, buscando distanciarse del enfoque transaccional de su predecesor y recuperar el papel de la ayuda al

desarrollo como herramienta de estabilidad y compromiso regional. La política de ayuda al desarrollo hacia América Latina experimentó una reconfiguración estratégica, orientada a abordar las causas estructurales de la migración, fortalecer la gobernanza democrática y contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

Uno de los pilares de la estrategia de cooperación impulsada por la administración Biden fue el relanzamiento de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica (APP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de abordar las causas estructurales de la migración irregular, tales como la pobreza, violencia, corrupción y falta de oportunidades. En este marco, la vicepresidenta Kamala Harris lideró una iniciativa que movilizó más de 4.200 millones de dólares en asistencia económica, incluyendo 950 millones adicionales anunciados en 2023, con una participación destacada del sector privado. Las inversiones se orientaron hacia sectores estratégicos como la industria textil, servicios financieros, infraestructura y empoderamiento de las mujeres, con metas ambiciosas como la creación de un millón de empleos para 2032 y la inclusión financiera de seis millones de personas para 2027 (García y Agobian, 2023).

Sin embargo, la falta de voluntad política por parte de los gobiernos centroamericanos para avanzar en reformas democráticas sustantivas, sumada al auge del populismo y el autoritarismo en la región, socavó los objetivos del programa. En lugar de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, una proporción significativa de los fondos fue canalizada hacia medidas de seguridad, lo que generó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y redujo su impacto en el desarrollo sostenible. Esta situación reproduce patrones observados en la versión original de la APP, lanzada durante la administración de Barack Obama en 2014, cuando más del 60 % del presupuesto fue destinado a seguridad en detrimento de inversiones sociales y económicas, replicando así estrategias que

previamente habían demostrado ser ineficaces (Council on Hemispheric Affairs, 2017).

A su vez, la administración Biden impulsó la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEA), una plataforma de cooperación regional lanzada en 2022 durante la Cumbre de las Américas. Esta iniciativa buscaba promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible, mejorar la resiliencia postpandemia y fortalecer las cadenas de suministro regionales (Martínez-Sapiña, 2024). A pesar de la continuidad de la Cumbre de las Américas en República Dominicana a finales del 2025, la APEA representa una visión opuesta, basada en la integración regional y la corresponsabilidad. Es poco probable que cuente con el respaldo de una administración Trump 2.0. Esta vulnerabilidad institucional pone de relieve la fragilidad de los mecanismos de cooperación en América Latina cuando dependen excesivamente de los ciclos políticos en Washington.

En materia de movilidad humana y refugio, la administración Biden adoptó un enfoque mixto. Por un lado, se comprometió a aumentar el número de admisiones de refugiados y a crear vías legales de migración; por otro, mantuvo políticas de contención en frontera, como el uso del Título 42 y acuerdos con países de tránsito. No obstante, a pesar de los esfuerzos discursivos y financieros, la estrategia de Biden enfrentó críticas por su implementación desigual, la persistencia de enfoques de seguridad y la falta de resultados tangibles en la reducción de la migración forzada (Global Refugee Personal, 2024).

Con la elección de Donald Trump por segunda ocasión en la presidencia estadounidense, la política exterior hacia América Latina se perfila bajo una lógica nacionalista y transaccional, en línea con su retórica de “Estados Unidos Primero”. En su discurso inaugural de 2025, Trump reafirmó su intención de reducir la dependencia desde los Estados Unidos respecto a la región, declarando que “ellos nos necesitan más a nosotros” y que “Estados Unidos no será el cajero automático del mundo”.

Estas declaraciones anticiparon una reorientación profunda de la política de ayuda al desarrollo de los Estados Unidos, ahora subordinada a objetivos estratégicos como la securización de las fronteras, la contención migratoria y la rivalidad geopolítica con China. En este contexto, se materializó el cierre de oficinas de USAID en países considerados periféricos para los intereses estadounidenses, así como recortes sustanciales en los presupuestos destinados a cooperación internacional.

3. Reconfiguración bajo Trump 2.0: ayuda condicionada y poder duro

No hay forma de escapar a nuestras obligaciones: nuestras obligaciones morales como líder sabio y buen vecino en la comunidad interdependiente de naciones libres - nuestras obligaciones económicas como el pueblo más rico en un mundo de gente mayoritariamente pobre, como una nación que ya no depende de los préstamos del extranjero que una vez nos ayudaron a desarrollar nuestra propia economía - y nuestras obligaciones políticas como el mayor contrapeso a los adversarios de la libertad,

J. F. Kennedy, 1961.

La segunda administración de Donald Trump ha iniciado una profunda reconfiguración de la política de la ayuda al desarrollo de los EE. UU., marcada por una lógica de eficiencia presupuestaria y alineamiento estratégico. En sus primeros días de gobierno, el presidente firmó una orden ejecutiva que congeló casi toda la ayuda exterior, con el objetivo declarado de revisar su pertinencia y coherencia con los intereses nacionales (Bustamante, 2025).

Esta medida fue formalizada mediante un memorando del Secretario de Estado, Marco Rubio, el 22 de enero de 2025, en el que se justificaba la suspensión de fondos por considerar que muchos programas no fortalecían la seguridad ni la prosperidad de los Estados Unidos. La ayuda exterior al desarrollo, que abarca desarrollo, ayuda humanitaria y financiamiento en seguridad, representa apenas

el 1% del presupuesto federal de los Estados Unidos, de los cuales USAID administra alrededor del 60% (Haltiwanger, 2025).

La revisión culminó en marzo de 2025 con la cancelación del 83% de los programas gestionados por USAID, lo que representa una de las reducciones más drásticas en la historia de la cooperación internacional estadounidense. El secretario Rubio argumentó que más de 5,200 contratos fueron eliminados por no contribuir a los “intereses nacionales fundamentales”, y destacó que gran parte de los fondos se destinaban a iniciativas que promovían valores considerados ajenos o incluso contrarios a la visión del actual gobierno, como la diversidad, la inclusión o la planificación familiar (AFP, 2025).

Establecida en 1961 bajo la administración del presidente John F. Kennedy, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) constituye, junto con la política exterior y de defensa, uno de los pilares fundamentales de la proyección internacional de los EE. UU., actuando como un instrumento clave de su poder blando (*soft power*). A lo largo de su historia, la Agencia ha sido objeto de críticas, particularmente desde sectores de izquierda en América Latina, debido a su participación en operaciones de contrainsurgencia, como las llevadas a cabo en Vietnam y Guatemala. No obstante, USAID también desempeña un papel relevante en el ámbito humanitario, brindando apoyo a campañas de vacunación, salud sexual y reproductiva, así como a iniciativas de inclusión social. Entre estas se destacan su respaldo al capítulo étnico del Acuerdo de Paz en Colombia de 2016 y a los derechos de la comunidad LGBTI+, programas que recientemente han sido suspendidos (Aguirre, 2025).

La reconfiguración institucional de USAID, lejos de representar un simple ajuste técnico, constituye un componente central de una estrategia exterior de corte transaccional y proteccionista, orientada a dismantelar los pilares del orden liberal internacional y a privilegiar el nacionalismo económico como principio rector de la acción exterior. Esta

transformación no solo evidencia un repliegue del compromiso estadounidense con el desarrollo regional, sino que también proyecta un debilitamiento estructural de los vínculos diplomáticos y una creciente incertidumbre para los países latinoamericanos que, históricamente, han dependido de estos flujos de asistencia para sostener agendas humanitarias y de desarrollo territorial (Edelman, 2025).

En este sentido, Roy (2025a) advierte que la “reestructuración” de la ayuda al desarrollo, y en particular USAID, conlleva riesgos sistémicos, ya que la congelación de recursos en sectores clave como la salud, asistencia humanitaria y el desarrollo económico amenazan con debilitar actividades fundamentales para el control de enfermedades infecciosas, la respuesta a crisis humanitarias y prevención del terrorismo. Esta situación compromete no solo la estabilidad de los países receptores, sino también los principios de corresponsabilidad y seguridad compartida que han sustentado históricamente la arquitectura internacional del desarrollo.

Este cambio representa un impacto inmediato y significativo. Con un presupuesto anual de aproximadamente 60.000 millones de dólares — de los cuales cerca de 40.000 millones eran canalizados a través de USAID —, la asistencia al desarrollo proporcionada por EE. UU. constituía, con diferencia, la más relevante entre los países industrializados, representando entre una cuarta parte y un tercio del total global. Para una quincena de países, muchos de ellos entre los más vulnerables económicamente, estos recursos equivalían a más del 10 % de sus ingresos fiscales. La reducción o suspensión de dicha ayuda ha obligado a varios de estos Estados a implementar recortes en servicios públicos esenciales, como la atención sanitaria, la nutrición y educación (Kessler, 2025).

Los desafíos se hacen más evidentes al analizar en detalle la distribución de los fondos, particularmente en América Latina. En el año fiscal 2023, la asistencia exterior gestionada por el Departamento de Estado y USAID destinada a la región superó los

2.000 millones de dólares. En Colombia, donde USAID ha sido históricamente el principal proveedor de cooperación internacional, la suspensión de recursos compromete programas humanitarios fundamentales. Entre ellos, destaca el apoyo al Programa Mundial de Alimentos, que en 2024 canalizó aproximadamente 45 millones de dólares para asistir a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos. Asimismo, se ve amenazada la financiación de organizaciones locales que brindan apoyo a poblaciones vulnerables expuestas a la violencia de actores armados (Fast Company, 2025).

En el caso de Brasil, USAID asignó 22,6 millones de dólares en 2024, de los cuales cerca de 14 millones se destinaron a iniciativas de protección ambiental. Su principal programa en el país, la Alianza para la Conservación de la Biodiversidad del Amazonas, ha sido crucial para comunidades indígenas como el Consejo Indígena de Roraima, que representa a 60.000 personas y promueve proyectos de agricultura sostenible, adaptación al cambio climático y empoderamiento de mujeres. La retirada de estos fondos pone en riesgo no solo la continuidad de dichas iniciativas, sino también la preservación de ecosistemas estratégicos como la selva amazónica (Associated Press, 2025).

Este repliegue plantea interrogantes sobre el futuro de la ayuda al desarrollo como instrumento de política exterior. Aunque no se ha decretado su eliminación total, la magnitud de los recortes y el cierre de oficinas de USAID en múltiples países sugieren una transformación estructural que podría redefinir el papel de los EE. UU. en el sistema internacional de cooperación. De acuerdo con Malacalza (2025):

El desmantelamiento de USAID afectará el poder blando de los Estados Unidos, profundizando su crisis de hegemonía como potencia, cada vez más inclinada hacia la coerción en lugar del consenso, a la presión antes que a la persuasión. El fin de la USAID no representa

el final de la ayuda norteamericana, sino el comienzo de un camino de manipulación y uso más áspero de la asistencia. (párr. 11)

Este giro en la política exterior de los Estados Unidos también se manifestó en su progresivo distanciamiento de organismos multilaterales fundamentales. El país se retiró nuevamente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; suspendió su participación en la Organización Mundial de la Salud (OMS); y cesó el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Estas decisiones no solo representaron una reducción significativa en los aportes financieros a dichas instituciones, sino que también contribuyeron al debilitamiento del entramado multilateral que sustenta la gobernanza global (García Roko, 2025).

A este panorama se suma una desaceleración significativa en los flujos de la Ayuda Oficial al Desarrollo³ (AOD) por parte de los principales donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta contracción no puede explicarse únicamente por restricciones presupuestarias internas, sino que responde a una tendencia más amplia de repolitización de la financiación internacional, en la que la AOD se encuentra crecientemente subordinada a intereses estratégicos, emergencias y condicionalidades ideológicas.

Esta orientación estratégica se refleja en los programas de erradicación de cultivos de coca implementados en países andinos como Colombia, Perú y Bolivia, financiados principalmente por Estados Unidos. Aunque

3 Es un subconjunto específico dentro de la Ayuda al Desarrollo. Se refiere exclusivamente a los flujos financieros y de cooperación técnica proporcionados por organismos oficiales (gubernamentales o multilaterales) de países donantes a países en desarrollo. Para que se considere AOD, debe cumplir con ciertos criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.

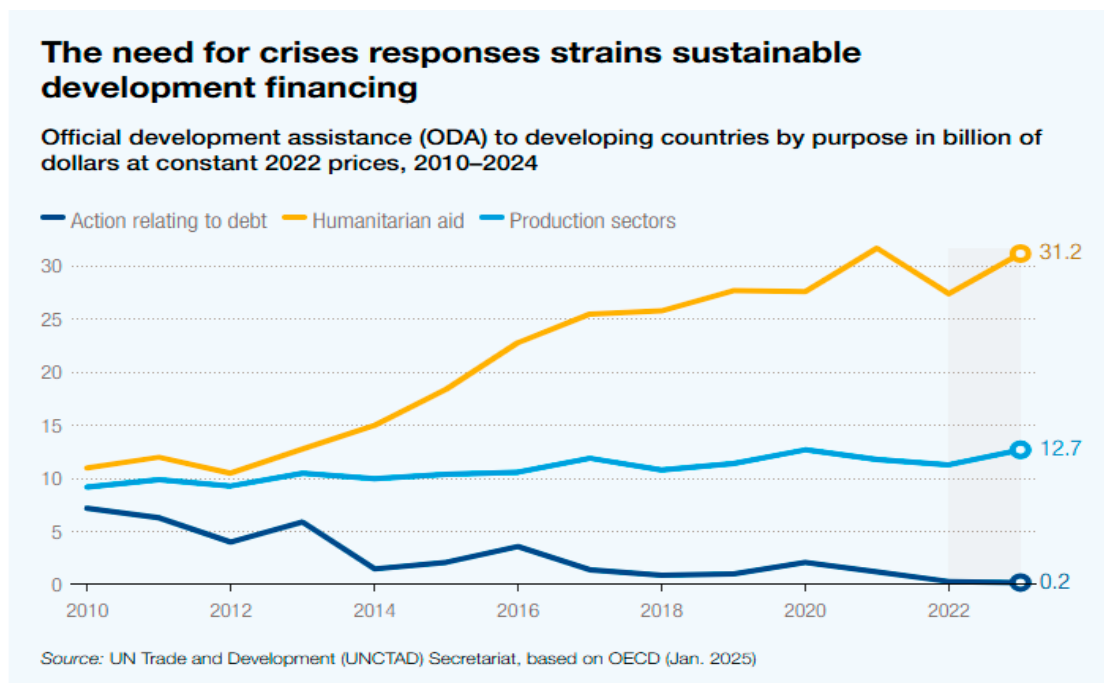
presentados como iniciativas de cooperación para el desarrollo, estos programas han estado fuertemente condicionados por prioridades de seguridad nacional del país donante, más que por las necesidades de desarrollo sostenible de las comunidades locales (Bejarano, 2022).

Lo anterior permite inferir que los desafíos geopolíticos están poniendo a prueba esos flujos financieros, vitales para las economías más pobres y frágiles. Nuevas emergencias — algunas con impacto directo en los países donantes — han cambiado prioridades y

generado una mayor presión sobre los presupuestos de ayuda. En 2023, la AOD destinada a países desarrollados aumentó hasta alcanzar los 43.000 millones de dólares, mientras que la ayuda para solicitantes de asilo y refugiados dentro de los países donantes se mantuvo elevada, en 31.000 millones. En contraste, la ayuda a África se redujo casi un 7 %, hasta los 74.000 millones; y la destinada a América Latina y el Caribe cayó un 15 %, hasta los 14.000 millones (ONU Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2025a).

Figura 1

Ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a países en desarrollo por finalidad, en miles de millones de dólares a precios constantes de 2022, 2010-2024



Nota. UNCTAD (2025a).

Al respecto, el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2024 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) caracteriza el momento actual como una fase de “fractura geoeconómica”, marcada por la fragmentación de los regí-

menes comerciales, financieros y de inversión (UNCTAD, 2024). Esta dinámica ha reducido el espacio de maniobra de los países en desarrollo, limitando su capacidad para formular políticas públicas autónomas y sostenibles.

En línea con esta tendencia, al menos siete países miembros del CAD han anunciado recortes inmediatos o proyectados en sus presupuestos de cooperación internacional. Se estima que el volumen total de AOD podría reducirse en hasta 74.000 millones de dólares en 2025, lo que representaría una caída de aproximadamente un tercio respecto a los niveles de 2023. En el caso estadounidense, a pesar de que la AOD representa solo el 0,24 % de la Renta Nacional Bruta (RNB), este país continúa

siendo el mayor donante mundial en términos absolutos, con aproximadamente 65.000 millones de dólares desembolsados en 2023, seguido por la República Federal de Alemania con cerca de 38.000 millones. Esta concentración de recursos en pocos actores refuerza la asimetría del sistema internacional de cooperación, donde las decisiones de un número reducido de países tienen efectos desproporcionados sobre el desarrollo global (Olivie, 2025).

Figura 2

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) proveniente de los miembros del CAD

The United States Is the Largest Provider of Foreign Aid

Official development assistance in 2023, G7 countries

	Aid	Aid as a share of GDP
United States	\$64.6B	0.2%
Germany	\$41.3B	0.9%
Japan	\$18.7B	0.4%
United Kingdom	\$18.6B	0.6%
France	\$15.8B	0.5%
Canada	\$9.1B	0.4%
Italy	\$6B	0.3%

Nota. OCDE, 2025.

Diversos factores explican esta contracción. De acuerdo con Olivé (2025), destacan la disminución de los costos asociados a la acogida de personas refugiadas — anteriormente contabilizados como parte de la AOD —, el auge de discursos políticos críticos con la cooperación internacional y la creciente desconfianza hacia los organismos multilaterales. A ello se suman las presiones fiscales internas derivadas de la inflación, el aumento del gasto en defensa, las secuelas económicas de la pandemia por COVID-19 y los conflictos internacionales. En resumen, varios donantes han optado por una cooperación más selectiva y geopolíticamente alineada, priorizando

regiones o sectores estratégicos en detrimento de una cooperación universal y estructural.

Esta lógica afecta de manera particular a América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los Estados son clasificados como países de renta media⁴ (PRM). La presión creciente para eliminar gradualmente la AOD destinada a estos países, bajo el supuesto de que pueden

4 Los países de renta media son aquellos que, según el Banco Mundial, tienen un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita que se encuentra entre ciertos rangos definidos anualmente. Esta clasificación se utiliza para orientar políticas de desarrollo, asignación de ayuda internacional y acceso a financiamiento.

autofinanciarse o acceder a los mercados internacionales, ignora las múltiples trampas estructurales de desarrollo que aún enfrentan. De hecho, casi el 30 % de todos los PRM del mundo se encuentran en esta región, lo que la convierte en la más sistemáticamente excluida de la arquitectura global de la cooperación. Dicha exclusión contradice el principio de universalidad de la Agenda 2030 y debilita el compromiso internacional de “no dejar a nadie atrás” (Malacalza y Morasso, 2025).

Además, la reducción de la AOD ocurre en un contexto global particularmente adverso para los países en desarrollo, caracterizado por crecientes restricciones al financiamiento externo. Según el Banco Mundial (2025), la inversión extranjera directa (IED) en estas economías ha caído a su nivel más bajo desde 2005, debido al aumento de barreras comerciales, la volatilidad financiera y el incremento de la deuda pública.

De manera similar, la UNCTAD advierte que la fragmentación financiera global está distorsionando los flujos de capital, dejando a muchas economías sin acceso a recursos esenciales para sectores estratégicos como infraestructura, energía y tecnología (UNCTAD, 2025b). En este escenario, los bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están llamados a desempeñar un papel más central, no solo como fuentes de financiamiento contracíclico, sino también como garantes de estabilidad macroeconómica y promotores de reformas estructurales que faciliten la movilización de capital privado hacia los países más vulnerables.

En este contexto de creciente centralidad de las instituciones financieras internacionales (IFIs), resulta clave analizar cómo los principales actores del sistema, en particular Estados Unidos, han buscado influir en su orientación estratégica. Durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI en abril de 2025, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reafirmó el compromiso de su país con estas instituciones, pero también dejó en claro que Washington no renunciará a ejercer su poder duro para

moldear su rumbo. En su intervención, Bessent criticó la expansión de funciones del FMI y el Banco Mundial hacia temas como el cambio climático y la equidad de género, y exigió una reorientación hacia sus mandatos económicos fundacionales (Marrero, 2025).

Esta postura refleja una estrategia deliberada de la administración Trump para reafirmar el liderazgo estadounidense en el sistema financiero global, utilizando su peso institucional y financiero como herramienta de presión. Desde una perspectiva teórica, esta conducta puede interpretarse a través del realismo ofensivo, que sostiene que las grandes potencias utilizan su influencia institucional para maximizar su poder relativo dentro del sistema internacional (Mearsheimer, 2001). Así, más que promover una cooperación multilateral desinteresada, EE. UU. ha optado por una diplomacia coercitiva que busca condicionar la agenda multilateral a sus intereses estratégicos.

A pesar de la influencia estructural que ejerce EE. UU., ambas instituciones han adoptado una postura pragmática frente a las presiones políticas provenientes de Washington. Aunque se intensificaron las tensiones por la intención de imponer condiciones más estrictas y una retórica crítica hacia la expansión de mandatos institucionales, altos funcionarios del Banco Mundial reconocieron la existencia de “mucho terreno en común” con la visión estadounidense, especialmente en lo relativo a eficiencia, rendición de cuentas y focalización de resultados (Garde, 2025).

Esta actitud refleja una estrategia de adaptación institucional que busca preservar la cooperación con su principal accionista sin comprometer completamente su autonomía técnica. Desde una perspectiva institucionalista, esta relación puede entenderse como un equilibrio entre dependencia estructural y resiliencia organizacional, donde las instituciones financieras internacionales negocian su margen de maniobra frente a los intereses de las grandes potencias, manteniendo su legitimidad ante el resto de los países miembros (Ramírez Ortiz, 2025).

En este escenario de contracción de la AOD, creciente incertidumbre financiera y tensiones geopolíticas, la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo — que se celebró en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025 — representó una oportunidad crítica para repensar el papel de la financiación pública y su capacidad de movilizar recursos privados hacia los países que más lo necesitan.

Las estimaciones consolidadas colocan la brecha de inversión anual para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los países en desarrollo en un rango cercano a los 2.5–4 billones de dólares por año, dependiendo de la metodología utilizada. Esta magnitud, recogida en el *Financing for Sustainable Development Report 2024* y en síntesis de organismos multilaterales, evidencia que dicha brecha no podrá cerrarse únicamente con fondos públicos, lo que plantea la necesidad de mecanismos innovadores de financiamiento y una mayor movilización de recursos privados (Naciones Unidas, 2024). La conferencia planteó, por tanto, la necesidad de adoptar un enfoque transformador, en el que la financiación pública actúe como catalizador de inversiones privadas mediante instrumentos innovadores como la financiación mixta, las garantías y los bonos temáticos. En un contexto donde menos del 1 % de la inversión privada relacionada con el clima y los ODS ha sido movilizada por la AOD, el desafío no es la escasez de capital global, sino la desconexión entre ese capital y los territorios que más lo requieren. La conferencia de Sevilla se perfiló como un punto de inflexión para redefinir la arquitectura financiera internacional y restaurar la credibilidad de la cooperación internacional en una era de riesgos múltiples y convergentes (Steiner, 2025).

4. Entre hegemonías: dependencia, resistencia y alternativas

La limitada capacidad de respuesta de los Estados latinoamericanos ante la suspensión de los fondos USAID y las amenazas de

deportaciones masivas no puede comprenderse sin considerar la profunda dependencia estructural que la región mantiene respecto a los Estados Unidos, tanto en términos comerciales como financieros. A modo de ejemplo, en 2024, más del 40 % de las exportaciones totales de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados de América Central y los Estados del Caribe tuvieron como destino el mercado estadounidense (BID, 2025). Asimismo, países como El Salvador, Honduras y Guatemala dependen en más del 20 % de su producto interno bruto (PIB) de las remesas enviadas desde territorio estadounidense (BID, 2024).

Esta asimetría económica reduce significativamente el margen de maniobra de dichos países, que se ven compelidos a adoptar posturas conciliadoras para evitar represalias comerciales o restricciones migratorias. Desde una perspectiva estructuralista, esta dinámica reproduce un patrón centro – periferia que limita la autonomía estratégica de la región y refuerza su vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de la hegemonía hemisférica. En esa línea, más como una medida de contención que como una estrategia de transformación, algunos Estados han optado por una diplomacia “defensiva”, caracterizada por la búsqueda de equilibrios pragmáticos ante un entorno internacional crecientemente volátil.

En ese contexto, los casos de México y Colombia resultan ilustrativos para comprender las tensiones entre soberanía discursiva y dependencia estructural que atraviesa buena parte de América Latina. Ambos países, históricamente vinculados a la agenda de seguridad y cooperación de Estados Unidos, han adoptado posturas críticas frente al repliegue de USAID, al tiempo que enfrentan limitaciones estructurales para sustituir esos flujos de asistencia. Su peso geopolítico, su protagonismo en la cooperación Sur – Sur y su exposición directa a las dinámicas migratorias y de seguridad regional los convierten en ejemplos paradigmáticos —aunque no exclusivos— de los dilemas que enfrenta la región en su

búsqueda de autonomía en un orden internacional en transición.

México, por ejemplo, a pesar de su peso geopolítico y su nivel de interdependencia económica con los Estados Unidos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura ambivalente frente al repliegue de USAID. Si bien ha reforzado la cooperación en materia de control fronterizo y capitalizado el proceso de relocalización de cadenas de suministro (*nearshoring*), también ha declarado públicamente que “es mejor que USAID cierre”, minimizando el impacto de su retirada (Swissinfo, 2025). Esta afirmación ha sido duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre la fragilidad de muchas iniciativas sociales y de derechos humanos que dependen de ese financiamiento. En 2024, México se ubicó entre los nueve países de América Latina que más recursos recibieron de USAID, con un total de 77,7 millones de dólares⁵, lo que evidencia una contradicción entre el discurso oficial y la realidad presupuestaria (Guerra Carrera, 2025).

A diferencia de otros Estados de la región, México goza de una posición negociadora más robusta, dado que más del 80 % de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. Esta ventaja relativa ha sido utilizada estratégicamente por la administración Sheinbaum para atraer inversión extranjera directa y reposicionar al país como un nodo clave en las nuevas cadenas de suministro globales, especialmente en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea (Castaño, 2025). Sin embargo, esta capacidad de negociación no ha sido acompañada por

una estrategia de desarrollo de largo plazo que permita reducir la dependencia estructural del financiamiento externo. La pregunta que persiste es si el Estado mexicano está dispuesto a emprender las reformas fiscales necesarias para fortalecer sus ingresos, garantizar la autonomía de la sociedad civil y canalizar recursos de forma eficaz hacia los gobiernos subnacionales. Sin estos elementos, las posturas soberanistas corren el riesgo de ser meramente simbólicas y profundizar las brechas estructurales existentes.

Colombia enfrenta desafíos similares, aunque en un contexto político distinto. La administración del presidente Gustavo Petro ha adoptado una retórica abiertamente crítica hacia Washington, marcada por episodios de confrontación, como la negativa a recibir vuelos de deportación de migrantes colombianos en enero de 2025. Sin embargo, esta postura se ha visto rápidamente matizada por la realidad de la dependencia estructural. Pese al discurso antiimperialista, el gobierno colombiano firmó poco después un acuerdo de intercambio de datos biométricos con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., evidenciando los límites del margen de maniobra frente al principal socio comercial y proveedor de cooperación en seguridad. Estados Unidos no solo es el destino principal de las exportaciones colombianas, sino también el principal financiador de programas de estabilización, asistencia humanitaria y lucha contra el narcotráfico.

Los más de 400 millones de dólares anuales que Colombia recibe de EE. UU. en concepto de ayuda al desarrollo, se destinan, en su mayoría, a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, así como a la atención de migrantes venezolanos y fortalecimiento de capacidades estatales en zonas afectadas por el conflicto armado. El cierre de USAID comprometerá no solo estos esfuerzos, sino también la estrategia estadounidense de externalización del control migratorio hacia países de tránsito. En una situación de creciente violencia por parte de disidencias armadas y persecución a defensores de derechos humanos, la coope-

5 En 2024, los fondos asignados por USAID a México se dirigieron principalmente a iniciativas de conservación ambiental en corredores bioculturales del sureste del país, al fortalecimiento de modelos de seguridad comunitaria en San Luis Potosí, y a la colaboración regional en el programa “Sembrando Oportunidades”, enfocado en el desarrollo agrícola juvenil para mitigar la migración en Centroamérica (Rosales, 2025).

ración internacional sigue siendo un pilar fundamental para evitar el colapso de la gobernabilidad territorial (Stacey, 2025). Así, tanto en México como en Colombia — al ser países referentes por sus condiciones geopolíticas, su historial de intervencionismo y protagonismo en la cooperación Sur – Sur —, la retórica soberanista sin planes de desarrollo sostenibles ni reformas estructurales profundas no solo resulta insuficiente, sino que puede agravar las condiciones de exclusión, inseguridad y dependencia que se pretende superar.

También, a nivel regional, América Latina enfrenta desafíos estructurales significativos en materia de articulación colectiva. Resulta impreciso afirmar que la región cuenta con un único proceso de integración que funcione como plataforma coordinada para gestionar la cooperación al desarrollo desde los países donantes. Por el contrario, coexisten al menos 18 mecanismos de integración, junto con múltiples espacios de diálogo y concertación política, caracterizados por su flexibilidad institucional, superposición temática y naturaleza marcadamente coyuntural (Ruiz-Camacho, 2025). Entre estos mecanismos destacan el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad Andina y los procesos de desintegración observados en el Cono Sur, como la fragmentación entre el MERCOSUR, la extinta Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y el debilitado Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), lo que evidencia la falta de una arquitectura regional robusta y estable.

Como advertía Tussie (2009), América Latina no constituye una entidad regional cohesionada, sino un entramado de proyectos que coexisten, compite y atraviesan ciclos de ascenso, estancamiento o declive. A más de una década de ese diagnóstico, su vigencia se reafirma en el contexto actual, donde la ausencia de una arquitectura regional robusta ha limitado la capacidad de los países latinoamericanos para articular respuestas coordinadas frente a desafíos emergentes, como la suspensión de fondos por parte de USAID. En muchos casos, los esquemas de integración

existentes no abarcan a todos los países de la región ni abordan de manera integral los temas prioritarios, lo que debilita su eficacia como plataformas de acción colectiva y acentúa la vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de actores externos.

En esa línea, algunos Estados de América Latina han intentado articular respuestas colectivas, aunque con resultados limitados y marcados por la ambigüedad. Un ejemplo reciente es la “Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente”, celebrada en Ciudad de México (enero de 2025), que reunió a representantes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Costa Rica y Panamá. El objetivo declarado fue avanzar hacia una gestión migratoria ordenada, segura, regular y humana. Sin embargo, el alcance de los compromisos asumidos fue limitado, y el encuentro evidenció más una voluntad de contención migratoria — en línea con las exigencias de Washington — que una estrategia regional autónoma de protección de derechos (Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, 2025).

La más reciente cumbre del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en abril de 2025, estuvo marcada por tensiones internas que evidenciaron las persistentes dificultades para construir posiciones comunes frente a desafíos compartidos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció un supuesto consenso final que no fue ratificado por todos los Estados miembros, lo que puso de manifiesto la falta de cohesión regional y la fragilidad institucional de los mecanismos de concertación política en América Latina. A pesar de ello, el evento representó uno de los pocos gestos de unidad regional, en el que mandatarios como Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum hicieron un llamado a la integración latinoamericana y expresaron su rechazo a la ofensiva comercial y antiinmigrante de la administración Trump. No obstante, estas declaraciones, aunque simbólicamente relevantes, no se tradujeron en acciones conjuntas concretas.

Estos episodios ilustran la paradoja de la integración regional en América Latina: mientras las condiciones estructurales exigen una mayor coordinación frente a un orden internacional cada vez más volátil y polarizado, las respuestas institucionales siguen siendo débiles, fragmentadas y reactivas. Desde una perspectiva teórica, esta situación puede interpretarse como una manifestación del “regionalismo defensivo”, en el que los Estados buscan preservar márgenes mínimos de autonomía sin cuestionar las jerarquías del sistema internacional. En ese sentido, Kleinschmidt y Gallego Pérez (2017) muestran que el regionalismo latinoamericano se ha caracterizado por una marcada diferenciación institucional, donde los proyectos de integración no configuran un proceso lineal hacia una mayor cohesión, sino un mosaico de arreglos flexibles y baja densidad política. Esta lógica de “regionalismo diferenciado” refleja precisamente la preferencia de los Estados por mantener espacios de cooperación limitados, funcionales y adaptativos, que salvaguarden la soberanía nacional y eviten compromisos que pudieran alterar las asimetrías estructurales del sistema internacional.

La falta de una arquitectura regional robusta, sumada a la heterogeneidad ideológica y a la dependencia estructural con los Estados Unidos, limita la capacidad de la región para articular una resistencia efectiva frente a los embates de la administración Trump 2.0. En este escenario, la disyuntiva entre adaptación y resistencia no solo remite a decisiones coyunturales, sino a la necesidad de repensar el lugar de América Latina en el sistema internacional desde una lógica de autonomía estratégica, cooperación horizontal y soberanía compartida.

Además, la orden ejecutiva de Trump ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de cooperación y ayuda humanitaria, al resaltar la dependencia de las organizaciones de la sociedad civil que están a merced de la voluntad política de los países donantes. En consecuencia, Organizaciones del Sur Global han reivindicado una agenda

de localización que priorice el liderazgo de actores comunitarios y la financiación directa a organizaciones locales, en contraposición a esquemas verticales dominados por donantes del Norte Global. Esta visión se alinea con los compromisos asumidos en el *Grand Bargain* de 2016, donde gobiernos donantes, agencias multilaterales y ONG internacionales acordaron destinar al menos el 25 % de la ayuda directamente a actores locales. No obstante, para 2022, solo el 2 % de los fondos había sido canalizado en esa dirección, lo que evidencia una brecha significativa entre el discurso y la práctica, y ha generado una creciente presión para repensar la arquitectura de la cooperación internacional (Stodt Mas, 2025).

Desde la sociedad civil del Sur Global se ha intensificado la exigencia hacia sus propios gobiernos para que asuman un rol más activo en la inversión social, reduciendo así la dependencia estructural de la ayuda externa. En ese sentido, la mejora de los servicios públicos es una condición indispensable para reducir la dependencia de la ayuda humanitaria estadounidense. El Reporte de Economía y Desarrollo 2024 del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) destaca que los gobiernos locales y regionales representan en promedio el 20% del gasto público en América Latina, pero enfrentan serias limitaciones institucionales y fiscales. La fragmentación legal, la baja capacidad técnica y la falta de coordinación entre niveles de gobierno dificultan la prestación eficiente de servicios esenciales como salud, educación, agua y saneamiento (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe [CAF], 2024).

El informe propone una estrategia de fortalecimiento institucional basada en tres pilares: a) Financiamiento subnacional sostenible, con reglas claras y previsibles; b) Capacidades técnicas locales, mediante formación y asistencia técnica; y c) Gobernanza multinivel, que articule políticas nacionales y territoriales. Estas reformas permitirían a los países de la región responder con mayor resiliencia a crisis externas y

reducir su exposición a decisiones unilaterales como la suspensión de la ayuda estadounidense. En resumen, la reconfiguración del sistema internacional de cooperación no solo implica una redistribución de actores y recursos, sino también una disputa por los principios que deben regir el desarrollo global: entre la instrumentalización geopolítica de la ayuda y una cooperación verdaderamente transformadora, inclusiva y centrada en las necesidades locales.

Este escenario ha abierto una ventana de oportunidad para que la cooperación Sur – Sur adquiera mayor protagonismo como alternativa al modelo hegemónico occidental. Países como China, India, Brasil y Arabia Saudí han incrementado su presencia en el ámbito de la cooperación, promoviendo esquemas más horizontales, menos condicionados y con énfasis en infraestructura, transferencia tecnológica y respeto a la soberanía nacional.

China se ha consolidado como un actor emergente de peso, particularmente en regiones donde los flujos tradicionales de ayuda, liderados por EE. UU. y Europa, han mostrado signos de retracción. Esta reconfiguración, especialmente visible en América Latina con el repliegue de USAID impulsado por la administración Trump, ha dejado un vacío institucional y financiero que Pekín ha sabido capitalizar estratégicamente. Distintos países en desarrollo perciben a China no solo como un socio económico, sino como una alternativa viable de cooperación “horizontal” frente a los condicionamientos tradicionales de la cooperación occidental.

Es así como la cooperación Sur – Sur ha dejado de ser una aspiración ideológica de los países emergentes para convertirse en una práctica consolidada dentro del sistema internacional de financiación para el desarrollo. Aunque sus raíces se remontan a hitos históricos, como la Conferencia de Bandung (1955) y la Conferencia de Buenos Aires (1978), su expansión más significativa ha tenido lugar en el siglo XXI, impulsada por el ascenso de economías emergentes como

Brasil, México, India, Turquía y China (El Kanfoudi, 2023). Estos países, muchos de ellos de renta media, han desarrollado sus propias políticas de cooperación, alejándose de los parámetros tradicionales de la AOD y promoviendo un modelo basado en el intercambio de experiencias, horizontalidad y respeto a la soberanía nacional.

Aunado a ello, la historia que sustentaba el sistema de ayuda — basada en una división binaria entre un Norte donante y un Sur receptor — resulta cada vez menos representativa de la realidad internacional. Desde la adopción de la Agenda de Acción de Addis Abeba, en 2015, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo se ha vuelto más fragmentado, con una proliferación de actores que no ha ido acompañada de una mayor coordinación entre ellos. A ello se suma un espectro más amplio de objetivos, sin que se hayan incrementado proporcionalmente los recursos disponibles para alcanzarlos. Las estructuras de gobernanza existentes no reflejan adecuadamente la nueva pluralidad de actores y resultan poco eficaces para generar compromisos vinculantes (Alonso, 2025, p. 151).

En este escenario, el creciente atractivo de China como socio estratégico para numerosos países del Sur Global se ha traducido en una expansión significativa de su influencia institucional y financiera. Particularmente, el despliegue de China en América Latina no es un fenómeno reciente, sino el resultado de una estrategia de largo plazo que ha transitado diferentes fases. Tras la fundación de la República Popular en 1949, los vínculos con la región eran débiles y se limitaban a contactos culturales y políticos con organizaciones no estatales. El reconocimiento diplomático se consolidó a partir de 1971, cuando Pekín ingresó en las Naciones Unidas, y se profundizó con las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en los años ochenta. A partir del siglo XXI, el comercio y la inversión crecieron de manera exponencial, especialmente después de la adopción de la estrategia *Go Global* en 2002. En 2008, el gobierno

chino publicó su primer *Libro Blanco sobre América Latina y el Caribe*, donde subrayó los principios de respeto mutuo, cooperación Sur-Sur y beneficio compartido. Este documento fue seguido por iniciativas políticas de alto nivel, como el marco “1+3+6”, presentado por Xi Jinping en 2015, y el segundo *policy paper* sobre la región en 2016, que reafirmó la voluntad de China de fortalecer una “asociación integral y cooperativa”.

En poco más de una década, la influencia china en América Latina se consolidó a través de una agenda de acuerdos bilaterales y regionales que abarcan comercio, inversión y cooperación. A diferencia de las IFIs tradicionales, el despliegue chino ha combinado diplomacia política, expansión comercial e instrumentos financieros propios. A través de iniciativas como la Franja y la Ruta, Pekín ha logrado implicar a decenas de Estados en un ambicioso proyecto de conectividad e infraestructura, al tiempo que ha promovido la creación de nuevas estructuras financieras multilaterales — como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS — que buscan ofrecer un sistema complementario al orden financiero internacional tradicional y reducir la dependencia de los mecanismos dominados por Occidente (Pontier, 2025). Además, las nuevas instituciones multilaterales impulsadas por China han introducido modalidades distintas de financiamiento. Por ejemplo, el NBD concede préstamos en moneda local, evita condicionalidades vinculadas a reformas de mercado y garantiza una representación más equitativa de los países del Sur en su gobernanza (Pontier, 2025).

En este mismo sentido, desde la creación de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA, por sus siglas en inglés), en 2008, China ha articulado una arquitectura paralela de asistencia que combina préstamos, inversión en infraestructura y transferencia tecnológica. Entre 2005 y 2023, China destinó a la región cerca de 120.000 millones de dólares a través del NBD y el Banco de Exportaciones e Importaciones

de China (Myers y Ray, 2023). Estas operaciones se canalizaron mayoritariamente hacia obras de infraestructura y energía; a menudo se estructuraron mediante contratos llave en mano que beneficiaron a empresas chinas (Vadell, 2017, como se citó en Viola-Reyes, 2021).

En términos comerciales y de inversión, la relación se profundizó con acuerdos y adhesiones institucionales. A partir de 2024, Pekín firmó acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Perú; además, más de veinte países de América Latina y el Caribe se han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, siendo el más reciente Colombia (Roy, 2025b). La inversión extranjera directa (IED) también ha reforzado estos lazos: en 2024 la IED de China en América Latina y el Caribe ascendió a aproximadamente 8.500 millones de dólares; es decir, el 6 % de su IED total (UNCTAD, 2025b).

Si bien aún no está claro si estas iniciativas responden a una estrategia de reforma desde dentro del sistema internacional o a un intento de construir una arquitectura paralela que acelere la desdolarización y dispute la hegemonía global a EE. UU., lo cierto es que reflejan una creciente frustración con el *statu quo* y una voluntad explícita de redefinir las reglas del juego global desde una perspectiva más inclusiva y multipolar.

En 2025, Pekín anunció un aumento del 15 % en su presupuesto de cooperación para la región, alcanzando los 6.000 millones de dólares. Dicha cifra contrasta marcadamente con el presupuesto global de 2.000 millones que manejaba USAID en la región antes de su desmantelamiento. Este financiamiento se canaliza a través de tres instrumentos principales: el Fondo de Cooperación para América Latina, centrado en asistencia económica directa; el Fondo de Promoción Industrial, orientado al desarrollo de sectores estratégicos; y el Fondo de Infraestructura, destinado a financiar grandes proyectos de conectividad y energía (El Mundo, 2025). La magnitud y orientación de estos recursos reflejan una

voluntad explícita de ocupar el espacio dejado por Estados Unidos, no solo como socio comercial, sino como actor político y financiero de referencia en el hemisferio.

Ese despliegue financiero e institucional se complementa con una hoja de ruta política y construcción de redes. Durante la ceremonia inaugural del Foro China – CELAC, en mayo de 2025, el presidente Xi Jinping presentó un plan de acción conjunto para el período 2025–2027, estructurado en torno a cinco pilares: Solidaridad, Desarrollo, Civilización, Paz y Conectividad entre Pueblos. Este marco busca institucionalizar la presencia de China en América Latina mediante mecanismos de cooperación política, técnica y cultural. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la invitación anual a 300 funcionarios de partidos políticos de países CELAC para visitar Beijing, con el objetivo de construir redes de afinidad política que trasciendan los ciclos electorales y garanticen continuidad en las relaciones bilaterales (Morales Ruvalcaba, 2025).

Más allá de los vínculos económicos, China ha consolidado en la última década una estrategia sostenida de diplomacia cultural en América Latina, centrada en la expansión de becas educativas, enseñanza del idioma y establecimiento de instituciones académicas conjuntas. Investigaciones recientes muestran que la movilidad de estudiantes latinoamericanos hacia universidades chinas ha crecido de manera constante gracias a programas de becas bilaterales, lo que ha favorecido tanto la transferencia de conocimientos como la difusión cultural y lingüística (Andrés y Perrotta, 2024).

De igual forma, Hu y Fan (2020) destacan que la cooperación educativa entre China y México incluye el fortalecimiento de programas de enseñanza del mandarín, creación de Institutos Confucio y el apoyo a centros de investigación, configurando un entramado institucional que refuerza la interdependencia cultural. Esta orientación ha sido, además, formalizada en el *China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean* (2024), donde se subraya el compromiso de

Pekín con la promoción del idioma chino en la región, aumento de becas gubernamentales y desarrollo de proyectos culturales conjuntos. Tales iniciativas reflejan cómo los lazos culturales se han convertido en un pilar de la relación birregional, complementando los flujos comerciales y financieros con instrumentos de *soft power* que profundizan la presencia de China en América Latina.

En esa línea, la narrativa oficial china enfatiza principios como el respeto mutuo, la no injerencia y la cooperación Sur – Sur como ejes rectores de su accionar internacional. No obstante, este enfoque ha generado un debate creciente sobre los límites entre solidaridad y dependencia. Mientras algunos gobiernos latinoamericanos valoran la flexibilidad y rapidez del financiamiento chino, otros actores — incluidos sectores académicos y de la sociedad civil — advierten sobre los riesgos de una nueva forma de subordinación estructural, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda, transparencia contractual y la autonomía tecnológica (Infobae, 2025). Las prácticas de contratación ligada o “cooperación atada” — la adjudicación preferente a empresas chinas — han sido ampliamente documentadas y criticadas por su impacto en contenido local y transferencia tecnológica (Castro, 2014, como se citó en Viola-Reyes, 2021).

Estudios y bases de datos recientes indican que la expansión del financiamiento chino en América Latina se ha concentrado mayoritariamente en sectores extractivos e infraestructura de exportación, consolidando en varios países un patrón de especialización primaria que reproduce la lógica centro – periferia: mientras recursos estratégicos como litio, cobre y petróleo fluyen hacia cadenas productivas con fuerte anclaje industrial en China, la región importa manufacturas que erosionan la capacidad industrial local (Myers y Ray, 2023; Economic Commission for Latin America and the Caribbean [ECLAC], 2024). Este esquema refuerza las asimetrías estructurales al situar a América Latina como proveedora de insumos básicos, limitando sus posibilidades

de avanzar en procesos de industrialización endógena y sofisticación tecnológica.

Ejemplos recientes ilustran esta dinámica con claridad. En Argentina, la empresa china Ganfeng Lithium inició en 2025 la producción en el proyecto Mariana, uno de los más relevantes del “triángulo del litio”, asegurando a Pekín un suministro estratégico para su industria de baterías eléctricas (Aquino, 2024). En Perú, el Estado adjudicó en 2024 a la compañía Jinzhao Mining la construcción de un puerto de 405 millones de dólares en Ica, diseñado principalmente para facilitar la exportación de minerales hacia Asia (Aquino, 2024). Por su parte, en Brasil, aunque se observa una incipiente diversificación hacia inversiones en vehículos eléctricos y energías limpias, la balanza comercial continúa dominada por la exportación de soja y mineral de hierro frente a la importación de bienes manufacturados chinos de alto valor agregado (Boston University Global Development Policy Center, 2023). Estos casos reflejan cómo, pese a los discursos oficiales de cooperación Sur-Sur y desarrollo compartido, las relaciones económicas tienden a reproducir la función de América Latina como periferia proveedora de materias primas dentro del capitalismo global.

La expansión de China en la región plantea una disyuntiva crítica: ¿se trata de una oportunidad para diversificar las fuentes de cooperación y fortalecer la soberanía regional, o de una nueva arquitectura de dominación bajo otros términos? La consolidación de China como actor global en América Latina obliga a repensar los marcos tradicionales de cooperación y gobernanza. Esta adaptación no solo implica responder a un nuevo competidor emergente, sino también a enfrentar las limitaciones inherentes a la cooperación Sur – Sur, especialmente en contextos donde persisten estructuras de dependencia neoes estructural. Además, China debe lidiar con el intervencionismo estadounidense y con los regímenes del orden liberal internacional — basados en pilares como la seguridad, economía y derechos humanos — que aún definen buena parte de la agenda interna-

cional latinoamericana. En este escenario, la región se encuentra ante una encrucijada: avanzar hacia una cooperación desde el Sur Global genuinamente transformadora o reproducir nuevas formas de subordinación bajo discursos alternativos.

Como Maiza-Larrarte y Bustillo-Mesanza (2025), la región se ha convertido en un espacio clave para observar los procesos de transición hegemónica a escala global. No obstante, la naturaleza autoritaria del sistema político chino y la asimetría de sus relaciones económicas con América Latina limitan su capacidad para consolidar una legitimidad hegemónica duradera. En consecuencia, la región aparece hoy como un escenario de competencia entre hegemonías parciales — una liberal y otra emergente —, donde las élites latinoamericanas oscilan entre la persistencia de la dependencia estructural y la búsqueda de márgenes de autonomía frente a ambos polos de poder.

Sin embargo, es un hecho que la modalidad horizontal de cooperación internacional ha adquirido una relevancia creciente, tanto como respuesta a la retracción de los flujos de ayuda del Norte como por una voluntad política de integración regional. Iniciativas como el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR [FOCEM], con un presupuesto anual superior a los 100 millones de dólares, han financiado proyectos de infraestructura, salud y educación en países con menores niveles de desarrollo relativo (FOCEM, 2023). Asimismo, organismos como la CEPAL, la FAO y la Unesco han impulsado plataformas de cooperación técnica entre países latinoamericanos, como el Comité Directivo Regional del ODS4, que reúne a 33 ministros de educación de la región y promueve el intercambio de políticas públicas en materia de inclusión, ciudadanía global y sostenibilidad.

Los datos disponibles revelan que la cooperación Sur – Sur en América Latina ha experimentado un crecimiento sostenido, aunque desigual, durante la última década. El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA] registró en 2024 un incremento

del 23% en los proyectos de cooperación técnica entre países de la región respecto al año anterior (SELA, 2024). Brasil continúa siendo el principal oferente de cooperación Sur – Sur, con un presupuesto anual de aproximadamente 400 millones de dólares canalizados a través de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC); seguido por México con 180 millones de dólares y Colombia con 95 millones de dólares (Mestre, 2024). Sin embargo, estos montos, aunque significativos en términos relativos, representan menos del 30% de lo que anteriormente proporcionaba USAID a la región. Esta brecha cuantitativa plantea interrogantes sobre la capacidad real de la cooperación Sur – Sur para compensar el vacío dejado por la retracción estadounidense, al menos en el corto plazo.

También, la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur – Sur de América Latina y el Caribe (junio 2025) reafirmó el compromiso de los países con la Agenda 2030 y propuso mecanismos innovadores de financiamiento que superen los criterios tradicionales de graduación basados en el PIB per cápita. Esto incluye el uso de indicadores multidimensionales de vulnerabilidad y la consolidación de instrumentos regionales como el FOCES (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2025).

No obstante, aunque estas modalidades reflejan una mayor pluralidad de actores y mecanismos para el intercambio de experiencias y conocimientos desde el Sur Global, se requieren nuevos instrumentos de financiación, inversión y cooperación, así como nuevos socios, agendas y capacidades que permitan fortalecer la presencia de la región en los actuales escenarios de transformación (Ruiz-Camacho, 2025). La falta de institucionalización, la escasa sistematización de resultados y la dependencia de ciclos políticos internos limitan su sostenibilidad.

5. Conclusiones

La reconfiguración de la ayuda al desarrollo bajo la administración Trump 2.0 ha

evidenciado una transformación estructural en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. La instrumentalización de la cooperación como mecanismo de presión política, la subordinación de la ayuda a intereses estratégicos y el desmantelamiento de USAID en la región, han debilitado los marcos tradicionales de asistencia, generando un vacío institucional que ha sido parcialmente ocupado por actores emergentes como la República Popular China. Este giro no solo refleja una crisis del multilateralismo liberal, sino una redefinición de las jerarquías en el sistema internacional de cooperación.

Frente a este escenario, América Latina ha mostrado una respuesta ambivalente. Por un lado, se han intensificado los vínculos con China y se ha fortalecido la cooperación Sur-Sur como alternativa a la dependencia histórica del Norte Global. Por otro, persisten limitaciones estructurales que obstaculizan la consolidación de una agenda regional autónoma: fragmentación política, debilidad institucional y falta de coordinación entre los Estados han impedido una respuesta articulada frente a los embates del nuevo proteccionismo estadounidense. Iniciativas como el Foro CELAC o las reuniones sobre movilidad humana han evidenciado más tensiones que consensos.

Así, la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento de las capacidades estatales se presentan como condiciones necesarias para reducir la dependencia de la ayuda humanitaria y ampliar los márgenes de autonomía estratégica. La cooperación Sur-Sur, aunque en expansión, aún enfrenta desafíos de institucionalización, sostenibilidad y escala. La región se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva crítica: reproducir esquemas de subordinación bajo nuevas formas o avanzar hacia una arquitectura de cooperación más equitativa, horizontal y resiliente.

En síntesis, la administración Trump 2.0 ha actuado como catalizador de una transformación más profunda en la relación entre América Latina y el sistema internacional de cooperación. La región no puede limitarse a

una lógica reactiva o defensiva. Requiere una estrategia proactiva que combine integración regional, diversificación de alianzas y fortalecimiento institucional. Solo así podrá enfrentar los desafíos de un orden global en transición y construir una posición más soberana y estratégica en el escenario internacional de la cooperación para el desarrollo.

Por último, este estudio ofrece una lectura estructural y neorrealista de la reconfiguración de la ayuda al desarrollo en América Latina. Futuras investigaciones podrían profundizar en el impacto empírico del repliegue estadounidense y en la expansión del financiamiento chino en sectores humanitarios, tecnológicos y de infraestructura. Asimismo, resulta pertinente analizar comparativamente el papel de otros actores — como la Unión Europea — en la reconfiguración del sistema global de cooperación. Este tipo de estudios permitiría evaluar con mayor precisión los alcances de la transición hegemónica y ofrecer insumos para una política regional más estratégica y autónoma frente a las nuevas dinámicas del poder internacional.

Referencias

- AFP. (2025, 10 de marzo). Administración Trump elimina el 83% de los programas de ayuda internacional de la USAID. *El Economista*. <https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/administracion-trump-elimina-83-programas-ayuda-internacional-usaid-20250310-749815.html>
- Aguirre, M. (2025, 5 de febrero). *Trump contra América Latina*. Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/trump-contra-america-latina/>
- Alonso, J. (2025). La Ayuda Internacional: hacia la renovación o la progresiva relevancia. *Información Comercial Española (ICE)*, *Revista de Economía*. (939), 149-167. <https://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/7911>
- Andrés, M. V. y Perrotta, D. (2024). What development lessons can be learned from Chinese mobilities? Trends in Argentinean students' mobility to China. *International Journal of Chinese Education*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/2212585X241306776>
- Aquino, M. (2024, 22 de marzo). *Peru awards China's Jinzhao \$405 million port construction contract*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/peru-awards-chinas-jinzhao-405-million-port-construction-contract-2024-03-22/>
- Associated Press. (2025, 2 de mayo). *From Amazon conservation to cocaine crackdowns: Here's how dismantling the USAID impacts Latin America*. Fast Company. <https://www.fastcompany.com/91273304/usaid-latin-america-impact-amazon-conservation-cocaine-crackdown>
- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2024). *Informe Anual 2024*. CAF.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2024, 28 de noviembre). *Remesas hacia América Latina y el Caribe moderan su crecimiento en 2024* [comunicado de prensa]. BID. <https://www.iadb.org/es/noticias/remesas-hacia-america-latina-y-el-caribe-moderan-su-crecimiento-en-2024>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2025, 14 de enero). *Crece las exportaciones de América Latina y el Caribe en un contexto de incertidumbre global* [comunicado de prensa]. BID. <https://www.iadb.org/es/noticias/crecen-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-en-un-contexto-de-incertidumbre>
- Banco Mundial. (2025, 16 de junio). *Los flujos de IED hacia las economías en desarrollo caen al nivel más bajo desde 2005* [comunicado de prensa]. Banco Mundial.

<https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2025/06/16/foreign-direct-investment-in-retreat>

Bejarano, R. (2022). *Ayuda Oficial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe: situación y tendencias*. Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. <https://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2022/10/AOD-de-la-region-Rodolfo-Bejarano-.pdf>

Boston University Global Development Policy Center. (2023). *China–Latin America and the Caribbean Economic Bulletin 2023 Edition*. Boston University. <https://www.bu.edu/gdp/2023/04/20/china-latin-america-and-the-caribbean-economic-bulletin-2023-edition/>

Bühler, L. (2025, 3 de febrero). *La Doctrina Trump* [publicación]. LinkedIn <https://es.linkedin.com/pulse/la-doctrina-trump-lucas-lionel-b%C3%BChler-ye4gf>

Bullmann, U. y Optenhögel, U. (2025, julio). *Los BRICS, Trump y los dilemas europeos*. Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/los-brics-trump-y-el-dilema-europeo/>

Bustamante, P. (2025, 25 de enero). *Estos son los únicos países que aún reciben ayuda internacional de Estados Unidos tras la investidura de Donald Trump*. Mag. <https://elcomercio.pe/mag/respuestas/us/los-paises-que-aun-reciben-la-ayuda-internacional-de-estados-unidos-tras-la-suspension-de-donald-trump-nnda-nnlt-noticia/>

Cardoso, F. H. (1977). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Siglo XXI Editores.

Castaño, P. (2025, 5 de mayo). *¿Se unirá América Latina contra Trump?* Jacobin. <https://jacobinlat.com/2025/05/se-unira-america-latina-contra-trump/>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). *Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe*. CEPAL.

Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2024). *Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2024*. United Nations. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b2f25863-9060-4668-a790-6161fad9b48b/content>

Edelman. (2025). *Toma de Posesión de Trump 2025. Perspectivas para América Latina*. Edelman.

El Kanfoudi, A. (2023, 22 de agosto). *¿Qué es la cooperación Sur-Sur?* El Orden Mundial. <https://elordenmundial.com/que-es-cooperacion-sur-sur/>

El Mundo. (2025, 15 de febrero). *Beijing aprovecha el vacío dejado por la USAID en la región*. Agencia País. <https://agenciapais.com/2025/02/15/beijing-aprovecha-el-vacio-dejado-por-la-usaid-en-la-region/>

Ellis, R. E. (2022). China's strategic engagement with Latin America: Challenges and opportunities for the region. *Latin American Policy*, 13(2), 254-273.

Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). (2023). *Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR*. FOCEM. https://www.mercosur.int/wp-content/uploads/2024/04/Folleto-FOCEM_ES.pdf

García Roko, R. (2025, 21 de abril). *Trump frente a la cooperación internacional al desarrollo*. Centro de Estudios Disciplinarios para el Desarrollo. <https://ceiped.org/trump-frente-a-la-cooperacion-internacional-al-desarrollo>

- García, Y. y Agobian, J. (2023, 6 de febrero). *EEUU compromete otros 950 millones de dólares en ayuda a países del Triángulo Norte*. La Voz de América. <https://www.vozdeamerica.com/a/eeuu-compromete-otros-950-millones-de-dolares-en-ayuda--triangulo-norte/6950000.html>
- Garde, M. (2025, 25 de abril). *El N° 2 del Banco Mundial sobre la política de Trump: «Hay mucho terreno en común»*. Swissinfo.ch. <https://www.swissinfo.ch/spa/el-n%C2%BA-2-del-banco-mundial-sobre-la-pol%C3%ADtica-de-trump%3A-%22hay-mucho-terreno-en-com%C3%BA-%22/89215710>
- Gilpin, R. y Gilpin, J. M. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press.
- Global Refuge Personal. (2024, 30 de septiembre). *EE.UU. reasienta a la mayor cantidad de refugiados en tres décadas y mantiene el límite de refugiados para el año fiscal 2025 en 125,000* [comunicado de prensa]. Global Refuge. <https://www.globalrefuge.org/es/news/refugees-resettlement-three-decades/>
- Guerra Carrera, L. F. (2025, 13 de mayo). *Cooperación o dependencia: el dilema de México ante el congelamiento de los fondos de USAID*. Dejusticia. <https://www.dejusticia.org/cooperacion-o-dependencia-el-dilema-de-mexico-ante-el-congelamiento-de-los-fondos-de-usaid/#:~:text=La%20cooperaci%C3%B3n%20internacional%20es%20una,sin%20interferencias%20ni%20restricciones%20pol%C3%ADticas.>
- Hu, J. y Fan, W. (2020, 1 de diciembre). *Internationalisation of Higher Education: Building South-South Partnerships between China and Mexico*. *International Journal of Chinese Education*, 9(2), 151-172. <https://doi.org/10.1163/22125868-12340125>
- Infobae. (2025, 10 de junio). *China impulsa un plan estratégico para afianzar su influencia en América Latina*. Infobae. <https://www.infobae.com/america/mundo/2025/06/10/china-impulsa-un-plan-estrategico-para-afianzar-su-influencia-en-america-latina/>
- Kessler, M. (2025, 26 de mayo). *La era de la fragmentación oportunista: pensar las finanzas del desarrollo tras Trump*. El Grand Continent. <https://legrandcontinent.eu/es/2025/05/26/la-era-de-la-fragmentacion-oportunista-pensar-las-finanzas-del-desarrollo-tras-trump/>
- Maiza-Larrarte, A. y Bustillo-Mesanza, R. (2025). *The hegemonic transition in Latin America: To what extent is China challenging US's hegemony?* *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace*, 14(2), 273-294. <https://doi.org/10.20991/allazimuth.1644600>
- Malacalza, B. (2020a). *Cooperación al desarrollo y relaciones internacionales: un campo de estudio en debate*. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (125), 209-228. <https://doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.209>
- Malacalza, B. (2020b, 5 de julio). *La rivalidad Estados Unidos-China en América Latina*. Cenital. <https://cenital.com/la-rivalidad-estados-unidos-china-en-america-latina/>
- Malacalza, B. (2024, 22 de mayo). *Foreign Aid, Development Cooperation and International Relations*. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.687>
- Malacalza, B. (2025). *El “poder oscuro” de Trump en América Latina*. Le Monde

- Diplomatique. <https://www.eldiplo.org/notas-web/trump-contr-a-america-latina-entre-sus-deseos-y-sus-limites/>
- Malacalza, B. y Morasso, C. (2025). International Development Cooperation Amid Great Transformations: What Latin America Brings to the Seville Conference. *Development Cooperation Review*, 8(1), 24-33. <https://ris.org.in/newsletter/dcr/2025/paper-3.pdf>
- Malamud, C. y Núñez Castellano, R. (2020, 6 de octubre). *Las elecciones presidenciales de Estados Unidos y América Latina*. Real Instituto Elcano. <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/las-elecciones-presidenciales-de-estados-unidos-y-america-latina/>
- Marrero, R. (2025, 27 de abril). Restableciendo el equilibrio: Un plan para la renovación económica de Estados Unidos y del mundo. *Diario Las Américas*. https://www.diariolasamericas.com/eeuu/restableciendo-el-equilibrio-un-plan-la-renovacion-economica-estados-unidos-y-del-mundo-n5374963#google_vignette
- Mares, D. R. (2022). Relaciones entre Estados Unidos y América Latina, 2016-2021: Bajo la Presión de los Retos Mundiales, Regionales y Nacionales. En J. Altamnn Borbón y F. Rojas Aravena (Eds.), *América Latina: ¿Hay voluntad política para construir un futuro diferente?* (pp. 79-94). FLACSO Secretaría General; Universidad para la Paz. <https://upeace.org/wp-content/uploads/2024/04/Rojas-y-Altmann-America-Latina-voluntad-politica.pdf>
- Martínez-Sapiña, J. (2024, 13 de enero). *Biden reformula la cooperación con Latinoamérica: APEA, entre la promesa y la realidad*. Universidad de Navarra. <https://www.unav.edu/web/global-affairs/biden-reformula-la-cooperacion-con-latinoamerica-apea-entre-la-promesa-y-la-realidad>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton & Company.
- Mestre, A. (2024). *Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica 2024* [presentación de diapositivas]. SELA. <https://www.sela.org/publicaciones/informe-de-la-cooperacion-sur-sur-y-triangular-en-iberoamerica-2024/>
- Meyer, M. (2024, 4 de diciembre). *Qué esperar de las políticas de la administración Trump 2.0 con respecto a América Latina*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://colombia.fes.de/detail/que-esperar-de-las-politicas-de-la-administracion-trump-20-con-respecto-a-america-latina.html>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2024). *China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean*. MFA.
- Morales Ruvalcaba, D. (2025, 14 de mayo). *IV Foro China-CELAC 2025: La visión de Beijing para América Latina*. REDCAEM. <https://chinayamericalatina.com/iv-foro-china-celac-2025-la-vision-de-beijing-para-america-latina/>
- Mudde, C. y Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Myers, M. y Ray, R. (2024). *Feeling the Stones: Chinese Development Finance to Latin America and The Caribbean, 2023*. Inter-American Dialogue; Boston University Global Development Policy Center. <https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2024/06/Chinese-Development-Finance-in-Latin-America-and-the-Caribbean-2023-Update-Final.pdf>

- Olivié, I. (2025, 27 de marzo). *¿El fin de la ayuda al desarrollo?* Real Instituto Elcano. <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-fin-de-la-ayuda-al-desarrollo/>
- ONU Comercio y Desarrollo. (2024, 10 de octubre). *Informe sobre Comercio y Desarrollo 2024: Repensar el desarrollo en la era del descontento*. UNCTAD. <https://unctad.org/es/publication/informe-sobre-comercio-y-desarrollo-2024>
- ONU Comercio y Desarrollo. (2025a, 9 de febrero). *La ayuda en una encrucijada: tendencias en la ayuda oficial al desarrollo*. UNCTAD. <https://unctad.org/es/publication/la-ayuda-en-una-encrucijada-tendencias-en-la-ayuda-oficial-al-desarrollo>
- ONU Comercio y Desarrollo. (2025b, 19 de junio). *La inversión extranjera directa mundial cae por segundo año consecutivo, planteando graves retos para los países en desarrollo*. UNCTAD. <https://unctad.org/es/news/la-inversion-extranjera-directa-mundial-cae-por-segundo-ano-consecutivo-planteando-graves>
- Pastrana, E. y Gehring, H. (2017). *La proyección de China en América Latina y el Caribe*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Piñón Avilés, O. A., García Gualda, S. M., Padilla Loredo, S. y Carreño Meléndez, F. (2024). Cooperación internacional: ¿Una herramienta de neocolonialismo? Un análisis crítico desde la perspectiva decolonial. *PACHA. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240350. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.350>
- Pontier, A. (2025, 19 de febrero). El pivote geopolítico del desarrollo. *El Grand Continent*. <https://legrandcontinent.eu/es/2025/02/19/el-pivote-geopolitico-del-desarrollo/>
- Prebisch, R. (1950). *El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*. CEPAL; Naciones Unidas.
- Ramírez Ortiz, D. D. (2025). The Hegemony of Financial Experts and Big Global Banks: a Critical Analysis of International Banking Rules: La hegemonía de los expertos en finanzas y de los grandes bancos globales: un análisis crítico de las reglas bancarias internacionales. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 70(253). <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2025.253.82982>
- Riggirozzi, P. y Tussie, D. (2018). *The rise of post-hegemonic regionalism: The case of Latin America*. Springer.
- Rodrigues Mateo, L. (2024). America First: Foreign Aid in the Trump Administration *Contexto Internacional*, 46(1). <https://doi.org/10.1590/s0102-8529.20244601e20220038>
- Roy, D. (2025a, 7 de febrero). *What Is USAID and Why Is It at Risk?* Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/article/what-usaid-and-why-it-risk>
- Roy, D. (2025b, 6 de junio). *China's Growing Influence in Latin America*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/background/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri>
- Ruiz-Camacho, P. (2025). ¿Integración o fragmentación? América Latina y el orden liberal. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 139, 31-51. <https://www.cidob.org/publicaciones/integracion-fragmentacion-america-latina-orden-liberal>
- Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. (2025, 28 de enero). *Cumbre sobre*

- Movilidad Humana en México, 16-17 de enero de 2025: Apoyo de Gobiernos de las Américas a Haití*. Embamex. <https://embamex.sre.gob.mx/haiti/index.php/es/comunicados/212-cumbremovilidad>
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. (2024). 50° Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. Informe Anual del Secretario Permanente [presentación de diapositivas]. SELA. <https://www.sela.org/wp-content/uploads/2024/12/Informe-anual-de-la-Secretaria-Permanente-2024.pdf>
- Stacey, D. (2025, 4 de febrero). Colombia, el país de América Latina que más fondos pierde con la decisión de Trump de congelar USAID. *El País*. <https://elpais.com/america-colombia/2025-02-05/colombia-el-pais-de-america-latina-que-mas-fondos-pierde-con-la-decision-de-trump-de-congelar-usaid.html>
- Steiner, A. (2025, 15 de junio). Reimaginando la ayuda al desarrollo en una era de riesgos. *El País*. <https://elpais.com/planeta-futuro/2025-06-16/reimaginando-la-ayuda-al-desarrollo-en-una-era-de-riesgos.html>
- Stodt Mas, O. (2025, 28 de mayo). *Cuando la ayuda deja de llegar: USAID y el sistema de cooperación internacional*. Universitat Oberta de Catalunya. <https://blogs.uoc.edu/edcp/es/cuando-la-ayuda-deja-de-llegar-usaid-y-el-sistema-de-cooperacion-internacional/>
- Taladrid, S. (2021, 11 de febrero). Can Biden Reverse Trump's Damage to Latin America? *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/news/news-desk/can-biden-reverse-trumps-lasting-damage-in-latin-america>
- Tussie, D. (2009, 1 de febrero). Latin America: Contrasting Motivations for Regional Projects. *Review of International Studies*, 35(S1), 169-188. <https://doi.org/10.1017/S026021050900847X>
- Welsh, T. (2021, 26 de octubre). *Trump funding cuts hurt 80% of USAID Central America programs: Report*. Devex. <https://www.devex.com/news/trump-funding-cuts-hurt-80-of-usaid-central-america-programs-report-101936>

